

La democracia peruana en peligro

Peruvian democracy at risk

GINO COSTA SANTOLALLA¹
Excongresista y exministro del Interior

© El autor. Artículo de acceso abierto,
distribuido bajo los términos de la Licencia
Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.



DOI: <https://doi.org/10.20453/ah.v67i1.5281>

La democracia peruana está en peligro. Desde el 2016 viene deteriorándose aceleradamente. Seis presidentes en ocho años, un Congreso disuelto, un autogolpe de Estado y la violenta represión de las protestas que lo sucedieron son algunas de sus expresiones.

Explican la crisis, entre otros, gobiernos sin mayoría parlamentaria y confrontación entre poderes, escándalos de corrupción que involucraron a casi todos los presidentes y la clase política, y los efectos devastadores de la pandemia, así como el desconocimiento de los resultados por la fuerza que perdió las dos últimas elecciones generales. ¡Una tormenta perfecta!

En lugar de ser la salida a la crisis, los comicios del 2021 la profundizaron, pues ganó un *outsider* antisistema sin experiencia política, que aceleró el desmantelamiento del Estado y la corrupción, acabó con el consenso sobre el modelo económico de mercado y dejó, luego de su breve y desastroso gobierno, un país polarizado y desmoralizado.

Vacado tras su fallida ruptura del orden constitucional, Pedro Castillo fue sucedido por Dina Boluarte, quien cambió de bando, previo acuerdo con sus adversarios parlamentarios, juramentó hasta el 2026 en lugar de

adelantar las elecciones como lo solicitaba una amplia mayoría ciudadana, y, ante las protestas, no dudó en ensangrentar el país.

Las élites empresarial, mediática y militar recibieron con alivio la caída de Castillo, y prefirieron, en aras de la estabilidad, cerrar filas con Boluarte y sostener su impopular pero amistoso gobierno, en lugar de ir a un

Donde Merino fracasó, Boluarte triunfó; es recién con ella que **se plasma el sueño del gobierno parlamentario** y se implementa la estrategia descrita, que nos recuerda a los noventa, cuando Alberto Fujimori construyó su dictadura desde la presidencia.

nuevo proceso electoral, con los mismos actores y con resultados impredecibles.

El gobierno de la nueva presidenta produjo una estabilidad mediocre, pues no logró legitimarse, ni reactivar la inversión privada, ni detener la violencia ni frenar la inmoralidad pública. Como su antecesor, Boluarte ha sido denunciada constitucionalmente por corrupción y carga con varias investigaciones que hacen dudar que llegue al 2026.

La desafección con la democracia y la fragmentación política se han agudizado y son de las más altas del hemisferio, y la descomposición institucional avanza más rápidamente que en ningún otro país

¹ Es coautor con Carlos Romero de *La democracia tomada. Pedro Castillo agudiza la crisis* (Instituto de Estudios Peruanos, 2024), y autor de *La democracia sitiada: un testimonio parlamentario (Perú 2016-2021)* (Planeta, 2022).

latinoamericano. Se calcula que en los dos últimos años han emigrado 800 000 peruanos, la mayoría jóvenes, una cifra récord; asimismo, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), de septiembre de 2023, indicó que un 47 % de jóvenes desear irse del país para trabajar o estudiar.

Según el IEP, en este mes la aprobación presidencial descendió a 5 %, empatando con la del Congreso, el punto más bajo para ambos poderes desde que se tiene registro y el más bajo del continente.

* * *

En la confrontación entre Ejecutivo y Congreso, iniciada el 2016, Boluarte es un punto de inflexión, pues con ella el primero quedó finalmente subordinado al segundo. No solo porque carece de bancada parlamentaria propia, sino porque se ha negado a ejercer dos funciones fundamentales, la de observar leyes cuestionables y la de eventualmente llevarlas al Tribunal Constitucional.

A diferencia de Kuczynski, Vizcarra y Sagasti, Castillo y sobre todo Boluarte dejaron de ser contrapeso efectivo al Congreso, que además aprovechó para nombrar hace dos años un Tribunal Constitucional a su medida. Es larga la lista de decisiones que han fortalecido al Congreso en detrimento del Ejecutivo y otros poderes, especialmente el Judicial.

Gracias al sometimiento de Boluarte, el Congreso ha desplegado con mayor facilidad una estrategia con tres objetivos centrales. Primero, copar las instituciones públicas que aún no controla para gobernar sin

contrapesos. Segundo, socavar y eventualmente destruir las investigaciones fiscales y los procesos judiciales anticorrupción que afectan a la clase política y a sus aliados judiciales y empresariales. Tercero, legislar para favorecer intereses particulares, sean estos mercantilistas, informales o incluso criminales.

Esta estrategia está en gestación desde el 2016, cuando luego de su segunda derrota electoral sucesiva, Keiko Fujimori anunció que haría uso de su mayoría para gobernar desde el Congreso. Fue así como, a fines del 2017 y principios del 2018, forzó la renuncia de Kuczynski, intentó destituir a Pablo Sánchez como fiscal de la Nación y recomponer el Tribunal Constitucional, y arremetió contra la prensa independiente, prohibiendo al Estado comprar espacios publicitarios en medios privados.

Vizcarra fue una desagradable sorpresa para la mayoría fujimorista, pues lejos de someterse la puso contra las cuerdas y disolvió el Congreso. El nuevo Legislativo, con una composición fujimorista distinta, se cobró su venganza, vacó a Vizcarra y entronizó a Merino en la presidencia de la República, pero gracias a la movilización ciudadana el intento duró solo cinco días.

Donde Merino fracasó, Boluarte triunfó; es recién con ella que se plasma el sueño del gobierno parlamentario y se implementa la estrategia descrita, que nos recuerda a los noventa, cuando Alberto Fujimori construyó su dictadura desde la presidencia.

Ahora Keiko lo intenta desde el Congreso con una coalición multipartidaria que incluye a sus aliados de derecha, a Cerrón y la bancada magisterial de Castillo, y a los Acuña, los Niños de Acción Popular y los Luna. Una coalición poderosa por su amplitud y falta de escrúpulos, pero precaria por su impopularidad y la mezquindad de sus objetivos, medrar y sobrevivir a costa del trabajo y el sudor de los peruanos.

* * *

Lo central del esfuerzo parlamentario del último año ha sido la protección de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, quien fue clave para develar la corrupción de Castillo y precipitar su caída, pero que lejos de ser una

Los principales poderes del Estado democrático están tomados por una amplia **coalición parlamentaria, mafiosa y autoritaria**, que pretende someter a los componentes independientes que aún quedan del sistema institucional, acabando con el equilibrio de poderes para favorecer la impunidad.

heroína de la lucha contra la corrupción, en realidad era la garantía de impunidad que el Congreso buscaba.

En año y medio de gestión, tres hechos lo resumen bien. Primero, la arbitraria destitución de la fiscal que investigaba a su hermana jueza por liberar a narcos a cambio de sobornos. Segundo, el archivo de las investigaciones contra decenas de congresistas a cambio de que removieran a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la investigaba precisamente por favorecer a su hermana, que inhabilitaran a la fiscal suprema Zoraida Avalos y que nombraran al abogado del prófugo Vladimir Cerrón como defensor del pueblo. Tercero, la desarticulación de los equipos fiscales anticorrupción. Entre los muchos fiscales honestos y competentes en la mira de Benavides, destacan Rafael Vela Barba y Marita Barreto, felizmente reivindicados. Vela conduce las investigaciones de Lava Jato y lavado de activos; y Barreto, las de Castillo, gracias a las cuales llegó a descubrir los dolosos arreglos de su jefa con el Congreso.

Es muy revelador que con estas credenciales el Congreso la defendiera tan entusiastamente para evitar que la JNJ la destituyera. La mayoría parlamentaria lo intentó en cuatro oportunidades y aunque no logró su máximo objetivo —gracias sobre todo a la intervención del Poder Judicial—, sí removió arbitrariamente a dos de sus magistrados, dejándola seriamente debilitada. Aun así, para grata sorpresa de todos, recientemente la Junta por unanimidad destituyó a Benavides.

Esta no solo cuenta con apoyo parlamentario, también la respaldan el TC y la Defensoría del Pueblo, así como figuras prominentes de la derecha más recalcitrante, quienes hace poco se dirigieron al secretario general de la OEA para reivindicarla, denigrar a la JNJ, y comunicar a través suyo a la comunidad hemisférica que la democracia peruana no estaría en peligro, y que, por el contrario, estaría siendo rescatada de la «mafia caviar» que supuestamente la tuvo secuestrada desde la caída de Alberto Fujimori en el año 2000.

Benavides también tiene el respaldo de los medios que sostienen a la coalición gobernante —el diario *Expresso* y el canal Willax— y de la Pestilencia, el brazo armado de la ultraderecha que acosa con violencia a sus opositores. La nueva prensa chicha promueve campañas de desinformación y desprestigio, de las que se hace eco este grupo violento cuyas víctimas más

importantes, aunque no únicas, son los periodistas independientes Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios.

La indiferencia y la pasividad de las autoridades, de las organizaciones y líderes de la sociedad civil, y de los grandes medios de comunicación ante estos ataques a la libertad de expresión, información y prensa son una muestra del pobrísimo estado de nuestra democracia.

Además de proteger a Benavides, la liquidación de la JNJ cumplía otros dos propósitos. Primero, vengar a los Cuellos Blancos destituidos por la Junta; segundo, capturar la institución para controlar los sistemas de justicia y electoral, claves para garantizar los objetivos de impunidad y continuidad de la coalición parlamentaria. En efecto, la JNJ selecciona, evalúa y destituye a fiscales y jueces a nivel nacional, así como a los jefes de la ONPE y el RENIEC, responsables de organizar las elecciones.

* * *

En resumen, los principales poderes del Estado democrático están tomados por una amplia coalición parlamentaria, mafiosa y autoritaria, que pretende someter a los componentes independientes que aún quedan del sistema institucional, acabando con el equilibrio de poderes para favorecer la impunidad. Impunidad frente a las muertes en las protestas, la corrupción política, judicial y empresarial, y el crimen organizado.

Solo se le oponen los núcleos sanos, todavía independientes, de la Fiscalía, el Poder Judicial y los organismos electorales, pero van por ellos. La coalición gobernante es rechazada mayoritariamente por la ciudadanía, la cual lamentablemente no se moviliza para detener el proyecto antidemocrático y criminal, cuyo objetivo estratégico es consolidar su poder en las próximas elecciones generales y acabar de vencer todo contrapeso institucional, tanto interno como externo.

A este proyecto le resulta fundamental sacar al Perú del sistema interamericano de derechos humanos, siguiendo el ejemplo de las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, que se encuentran en las antípodas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), nuestro norte natural, la asociación de democracias de mercado más prósperas y socialmente cohesionadas del mundo.